



Santiago, diez de marzo de dos mil veintitrés.

A fojas 18, a lo principal, téngase presente. Estese a lo que se resolverá; al primer, cuarto y sexto otrosíes, se resolverá en su oportunidad; al segundo otrosí, ténganse por acompañados; al tercer otrosí, estese a lo resuelto por el Pleno a fojas 38; al quinto otrosí, estese a lo que se resolverá.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 20 de febrero de 2023, Ronald Kurt Von Der Weth Pettinelli y Antonio Barchiesi Chávez, accionan solicitando la declaración de inconstitucionalidad, según se lee de la petitoria a fojas 11, “de los movimientos Coordinadora Arauco Malleco (CAM) liderada actualmente por Juan Pichún Collonao, el Órgano de Resistencia Territorial LAFKENCHE, liderada por José Benicio Huenchunao Mariñan, Órganos de Resistencia Territorial Wenteche Katrileo y Nagche, ambas coordinadas por Rafael Pichún Collonao”;

2°. Que, por resolución de 21 de febrero de 2023, a fojas 17, el señor Presidente (s) del Tribunal Constitucional ordenó la cuenta del requerimiento deducido ante la Primera Sala;

3°. Que, posteriormente, con fecha 27 de febrero del presente año, a fojas 18, rola presentación de la parte requirente por la cual complementa “los antecedentes que sustentan la declaración de inconstitucionalidad de los movimientos Coordinadora Arauco Malleco, Órgano de Resistencia Territorial Lafkenche y Órganos de Resistencia Territorial Wenteche Katrileo y Nagche”;

4°. Que, el artículo 93, inciso primero, N° 10, de la Constitución Política, establece que es atribución de este Tribunal “[d]eclarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del N° 15° del artículo 19 de esta Constitución”.

A su turno, en los artículos 129 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se desarrollan los requisitos para accionar en la competencia recién anotada. Estas disposiciones prescriben lo siguiente:

“Artículo 129. El proceso para que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos o partidos políticos, como asimismo, la responsabilidad de las personas naturales que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración a que se refiere el número 10° del artículo 93 de la Constitución Política, se iniciará por requerimiento de quien



ejerza la correspondiente acción pública. Será aplicable a estos casos lo dispuesto en el artículo 118 de la presente ley.

Artículo 130. El requerimiento deberá contener:

- 1. La individualización del requirente;*
- 2. La individualización del partido político, organización, movimiento, y de su representante legal, cuando corresponda, o persona afectada;*
- 3. La relación de los objetivos, actos o conductas que se consideren inconstitucionales de acuerdo a lo previsto en los incisos sexto y séptimo del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política, que se imputen a los partidos políticos, organizaciones, movimientos o personas afectadas, y*
- 4. La indicación de todas las diligencias probatorias con que se pretende acreditar los hechos que se invocan.*

Respecto de la prueba instrumental se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de la presente ley.

Artículo 131. La sala que corresponda examinará si el requerimiento reúne los requisitos establecidos en el artículo anterior. Si no los reune, o si los objetivos, actos o conductas imputados no correspondieren a alguno de los previstos en los incisos sexto o séptimo del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política, el Tribunal no le dará curso, mediante resolución fundada. En caso contrario, dispondrá que se notifique al afectado en la forma dispuesta en el inciso segundo del artículo 126 y en el artículo 138 de esta ley.

Si el afectado no fuere habido por cualquier causa, el Tribunal dispondrá que la notificación se practique en la forma que estime adecuada, mediante resolución fundada”;

5°. Que, examinado el requerimiento a efectos de pronunciarse sobre su admisibilidad, se verifica que, en la especie, concurren los requisitos formales que se contienen en el artículo 130 de la ley orgánica constitucional de esta Magistratura;

6°. Que, por su parte, el artículo 138 del mencionado cuerpo legal establece que la notificación “se practicará en la forma que el Tribunal lo disponga mediante resolución fundada”, por lo que resuelta idóneo, al tenor de la individualización que rola en autos de las partes afectadas por la acción constitucional de estos autos, disponer su práctica a través de receptor judicial por la parte requirente;

7°. Que, a su turno, conforme lo prevén los artículos 118, 128 y 137, “[l]as personas naturales o jurídicas que no sean órganos constitucionales y que deduzcan la acción pública a que se refiere el inciso decimoquinto del artículo 93 de la Constitución Política, estarán obligadas a afianzar las resultas de su acción a satisfacción del Tribunal”.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 10, e inciso final, de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 129 y siguientes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

- 1 A lo principal de fojas 1, se declara admisible** el requerimiento deducido en conjunto con la presentación de fojas 18; al primer otrosí, vuelvan los autos a la Sala a los efectos correspondientes; al segundo otrosí, ténganse por acompañados; al tercer y séptimo otrosíes, téngase presente; al cuarto otrosí, se resolverá en su oportunidad; al quinto otrosí, estese a lo que se resolverá a continuación; al sexto otrosí, estese a la reserva decretada por el Pleno a fojas 38; al octavo otrosí, como se pide.
- 2 Notifíquese a las partes afectadas** por la acción constitucional deducida **a través de receptor judicial** por la parte requirente, acompañándoseles copia del libelo y su complemento, así como de la presente resolución. Confiérase el plazo de diez días para su contestación.

DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora NANCY YÁÑEZ FUENZALIDA, Presidenta, y del Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, quienes estuvieron por declarar inadmisibles el requerimiento, conforme las siguientes razones:

1°. Que, en el artículo 19, numeral 15, se consagra el derecho fundamental de libertad de asociación, expresándose algunos de los elementos explícitos de su delimitación, a saber, su inciso cuarto, al señalar que “Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado” y su inciso sexto al señalar que “La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad”, estableciendo en los incisos séptimo y octavo el régimen sancionatorio al respecto, el cual incluye disolución de la organización, cesación de cargos, además de inhabilidades y pérdida de derechos por un lapso de 5 años.

De tales normas fluye una distinción muy relevante, pues del aludido inciso 4° es inequívoco concluir la proscripción constitucional de las asociaciones dirigidas a socavar la seguridad del Estado, consagrada por esa vía como bien jurídico y como



límite a la libertad de asociación. En tal sentido, cabe recordar la existencia de un estatuto penal especial sobre seguridad del Estado a nivel legislativo y además la figura típica de asociación ilícita recogida en el artículo 292 del Código Penal, que tiene una regulación especial en normas referidas al tráfico de drogas y estupefacientes, así como en materia de delitos terroristas.

A su vez, el artículo 93 de la Constitución Política determina en su numeral 10° que es atribución de este tribunal “Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del N° 15° del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presidente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio”.

Cabe observar que no es competencia de este Tribunal conocer y declarar acerca de todas las pretensiones procesales referidas a declarar contrarias a derecho asociaciones, movimientos, partidos o grupos, sino que esta Magistratura es competente solamente para declarar el ilícito del inciso sexto ya transcrito, lo que exige diferenciar su tipicidad ius constitucional para poder reconocer la competencia de este tribunal y poder diferenciarla de la de los tribunales ordinarios, que son los llamados a conocer y declarar las materias referidas en el inciso cuarto, en especial referencia a asociaciones a las que pueda imputarse lesionar el orden público y/o la seguridad del Estado. Esto último, como se viera, ya en abstracto resulta ser un tema de relevancia penal, motivo por el cual la tipicidad ius constitucional del ilícito que este tribunal puede conocer debe ser también delimitada a la luz del artículo 83 de la misma Constitución, en tanto dispone que “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley”.

Es en tal sentido que el principio de corrección funcional y el artículo 7° de la Constitución Política determinan la necesidad de especificar y reconocer los contornos de la competencia de este Tribunal en esta sede, recordándose que por virtud del artículo 3° de la ley orgánica constitucional de esta Magistratura, “El Tribunal solo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de las personas y los órganos constitucionales legitimados de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de la República o de oficio, en los casos señalados en la Constitución Política de la República y en esta ley” y que “Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva el asunto sometido a su decisión”. Estamos así en presencia de la materia, entendida como factor de competencia de un tribunal, siendo evidente que la tipicidad ius constitucional de la figura ilícita del

inciso sexto del numeral 15° del artículo 19 es diferente de la de su inciso tercero, pues son figuras distinguiblemente delimitables y este Tribunal es competente para conocer y resolver solamente acerca de una de ellas, estándole vedada la otra (la del inciso tercero), por ser competencia de los tribunales ordinarios y en sede penal también del Ministerio Público, por exigencia expresa de otra norma constitucional, cual es la del artículo 83.

2°. Que, en un proceso iniciado por acción pública y con cargas procesales para el requirente, dentro de los presupuestos de admisibilidad que determinan la apertura del proceso, el artículo 130 de la ley orgánica constitucional de esta Magistratura exige al actor imputar y delimitar la imputación, el exigir para el requerimiento en su numeral 3° “La relación de los objetivos, actos o conductas que se consideren inconstitucionales de acuerdo a lo previsto en los incisos sexto y séptimo del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política, que se imputen a los partidos políticos, organizaciones, movimientos o personas afectadas”. En tal sentido, la exigencia de admisibilidad no es solamente la existencia de un “relato específico”, sino que además implica un examen de dicho relato de imputación por parte de la sala, para determinar sus caracteres de derecho y verificar entonces si es o no posible un “encuadre”, “ajuste” o “subsunción” de hechos y antecedentes dentro de la materia establecida por inciso sexto del numeral 15° del artículo 19 de la Constitución con lo que en esta etapa procesal obre en el proceso, cuestión que está lejos de ser algo parecido a un examen de fondo, sino que es un presupuesto que se establece de manera imperativa como cuestión de admisibilidad en el artículo 131 de la ley orgánica constitucional de este tribunal al señalar, en referencia a los presupuestos de admisibilidad, que “Si no los reune, o si los objetivos, actos o conductas imputados no correspondieren a alguno de los previstos en los incisos sexto o séptimo del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política, el Tribunal no le dará curso”. Esta norma es particularmente relevante, y es la garantía del principio de corrección funcional en la delimitación de las potestades de este tribunal con las de la justicia ordinaria -incluida la penal- ya que exige a esta Sala un examen de la delimitación de la materia que se pretende someter a su conocimiento, y ello determinará si se abre o no proceso, siendo ello adicional a los requisitos meramente formales que se establecen con anterioridad en el artículo 130 de la misma ley orgánica.

Así, el artículo 131 aludido, al determinar el deber de la Sala de verificar el encuadre o cabida de los hechos imputados en la materia del inciso sexto del numeral 15° del artículo 19 de la Constitución determina también que es en esa oportunidad -el examen de admisibilidad- aquella en la cual la sala debe comprobar que la materia no sea de aquellas que sobre el derecho de libertad de asociación escapan a su competencia, como lo es la investigación del uso delictivo-penal de organizaciones y la determinación de lesiones o atentados al orden público o a la seguridad interior del Estado, que caben en el inciso 4 del numeral 15°, y no en su numeral 6°, que es la materia de la competencia de esta Magistratura.

Así, el examen de “subsunción” en la materia propia del proceso y con los antecedentes actuales que exige el artículo 131 de la ley orgánica de esta Magistratura no puede ser obviado, pues es imperativo, exige hacerlo en ese momento procesal y es además uno de los casos y formas que deben concurrir para que esta magistratura pueda actuar, es decir, es uno de los presupuestos de validez de un proceso en los términos del artículo 7° de la misma Constitución. Así, tal examen no puede ser obviado ni minimizado.

3°. Que, por lo expuesto, la litis a conocer y resolver se ha de referir a hechos específicos, y el artículo 130 de la ley orgánica de este Tribunal exige especificarlos, pues este órgano actúa a petición de parte (acción pública en este caso), por lo que el proceso ha de tener un objeto determinado y delimitado. Los hechos invocados han de ser específicos y han de señalarse pormenorizadamente por norma expresa del artículo 131 de la ley orgánica de este Tribunal, el examen de admisibilidad presupone la delimitación de los hechos para examinar si se subsumen o no en las competencias de esta Magistratura requiere antecedentes suficientes, y es por ello que el artículo 130 al establecer los presupuestos de admisibilidad se refiere a la prueba documental que debe acompañar el requerimiento en esta fase, pues para dar por acreditada la existencia de organizaciones y eventualmente identificar a quienes ejercen su representación como se pretende en el requerimiento de autos ella es necesaria, señalando que “Respecto de la prueba instrumental se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 119 de la presente ley”, norma que señala que “En todo caso, la prueba instrumental deberá acompañarse al requerimiento bajo sanción de no admitirse con posterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley”. Es por lo anterior que el Ministro Rodrigo Pica planteó, previo a emitir pronunciamiento, que consideraba necesario requerir antecedentes adicionales para resolver la admisibilidad, cuestión que no obtuvo los votos para ser acordada.

A todo evento, tal déficit redundaría en que el requerimiento y los documentos que se le acompañan no consignan antecedentes suficientes como para verificar la aludida subsunción en la materia respectiva y aperturar el proceso a la luz de la exigencia del artículo 131 de la ley orgánica ya aludida.

4°. Que, adicionalmente, es un hecho público y notorio que existen en cursos diversas investigaciones y procesos penales referidos a imputaciones por una serie de delitos en contra de las denominadas “CAM” y de diversas organizaciones, entre ellas algunas denominadas “ORT”, delitos dentro de lo cual se encuentran algunos referidos a Ley de Seguridad Interior del Estado. Es en tal sentido que, además, no se aporta la totalidad de los antecedentes necesarios que sustentarían la cuestión constitucional planteada en un requerimiento de este tipo como para poder realizar dicha subsunción, agregándose además que, por ejemplo, a fojas 4 se sostiene la naturaleza de las acciones en un documento llamado “ALLIED JOINT DOCTRINE FOR COUNTERINSURGENCY (COIN) – AJP-3.4.4”, que es un manual de contrainsurgencia oficial de la OTAN, el cual es ignoto e inaccesible para este tribunal, pero que a todo

evento, denota que lo imputado pareciera ser subversión, sedición, secesionismo o algo parecido, lo que es concordante con el término “movimientos insurgentes” que se usa a fojas 2 por los requirentes.

Así, si se busca un encuadre de tales hechos en la normativa constitucional sobre libertad de asociación, ello reconduciría con los antecedentes y hechos invocados al inciso cuarto del numeral 15° del artículo 19 de la Constitución, por los bienes jurídicos de orden público y seguridad del Estado, al ser un hecho que las acciones imputadas a la CAM y las ORT, organizaciones objeto del requerimiento, así como las de sus integrantes y líderes, se encuentran bajo diversas investigaciones penales, incluyendo cargos de asociación ilícita, robo de madera, usurpación, incendio y delitos contra la ley de seguridad interior del Estado, lo cual además de ser un hecho público y notorio consta de los documentos remitidos a este tribunal en el marco de una medida para mejor resolver que fue decretada y cumplida en el proceso Rol N° 13.605.

Es en virtud de tales antecedentes, que al verificar el examen del artículo 131 de la ley orgánica constitucional de este tribunal, en referencia a los presupuestos de admisibilidad, debe constatarse con los antecedentes que obran en esta etapa procesal, que “si los objetivos, actos o conductas imputados no correspondieren a alguno de los previstos en los incisos sexto o séptimo del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política, el Tribunal no le dará curso”. En mérito de lo expuesto precedentemente, y a la luz de los antecedentes que en esta etapa obran, que la imputación de hechos que puedan revestir caracteres de delitos no es propia de este proceso, no porque carezcan de relevancia, sino porque una imputación de esos caracteres desbordaría la delimitación constitucional específica del inciso sexto del número 15° del artículo 19 de la Constitución, debiendo agregarse que por sus caracteres y entidad requieren entonces de investigación y proceso penal, pues la comisión de delitos no puede ser establecida en otra sede, y eso es lo que significan a estos efectos los artículos 83 y 19 no. 3° de la Constitución. Sostener lo contrario conllevaría una superposición de potestades jurisdiccionales, entre los tribunales ordinarios y esta Magistratura, a efectos de conocer y resolver dar por establecidos hechos que revisten caracteres de delito, en total desarmonía entre los artículos 83 y 19, numeral 15°, inciso sexto, de la Constitución Política.

5°. Que, por lo previamente razonado, corresponde no dar curso al proceso y por ello se debe declarar la inadmisibilidad del requerimiento, en virtud del artículo 131 de la ley orgánica de este tribunal, en tanto los antecedentes reseñados y acompañados no permiten dar por establecido de manera suficiente en sede de admisibilidad que los objetivos, actos o conductas imputados correspondan a los previstos en los incisos sexto o séptimo del número 15° del artículo 19 de la Constitución Política, sino que más bien los antecedentes acompañados y la significación que se les atribuyen parecieran referirse a los de su inciso 4°, siendo concordante con ello que estén siendo investigados en la sede penal correspondiente. A mayor abundamiento, la identificación de la órbita penal como



la idónea en este caso no significa obviar alguna posible ilicitud constitucional, sino todo lo contrario, pues el orden penal es de sanción y afectación más intenso, pues la eventual pérdida de derechos políticos y la inhabilidad para cargos públicos aparecen como posible pena accesoria frente a una declaración de culpabilidad, a lo que se suman las consecuencias de imputaciones por delitos referidos a asociación ilícita y ley de seguridad interior del Estado.

Notifíquese.

Rol 14.059-23-IPP

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, y por sus Ministros señor Nelson Roberto Pozo Silva, señor José Ignacio Vásquez Márquez, señor Miguel Ángel Fernández González y señor Rodrigo Patricio Pica Flores.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional.



1DC17474-0648-4C76-BBCC-BD1D0DEC04D0

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.